

Coronel, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho

VISTO:

A folio 1 de la carpeta judicial virtual, con fecha 30 de mayo de 2017, comparece doña Claudia Andrea Rojas Cabrera, abogado, en representación de doña **BLANCA GEORGINA DELGADO REYES**, pensionada, casada, y viene en deducir demanda de Indemnización de Perjuicios en Procedimiento Ordinario en contra de don **CARLOS ARSENIO SAEZ VALDES**, conductor, domiciliado en calle Pedro María González número 24, Población Libertad, Comuna de Coronel, en su calidad de causante directo y, en contra de don **HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ**, empresario, como tercero civil responsable solidario, domiciliado en calle Manuel Montt número 253, comuna de Coronel.

Funda su demanda en que su representada en la actualidad es una mujer de la tercera edad que sufrió un accidente con fecha 19 de junio de 2013, época en que tenía 71 años de edad, alrededor de las 10.15 horas, y que el demandado principal don Carlos Arsenio Sáez Valdés, conducía una camioneta marca Kia Motors, modelo Frontier súper 2.7, año de fabricación 2000, color blanco, placa única TN-8186, inscripción en Registro Nacional de Vehículos Motorizados TN.8186-3, número motor 249879, número de chasis 869498, de la ferretería el Minero de Coronel y de propiedad de don Héctor Carlos Inostroza Martínez, demandado antes individualizado, por calle Remigio Castro de poniente a oriente de esta comuna, y que al llegar a la intersección con calle Sotomayor y efectuar un viraje al norte por dicha vía, debido a que conducía sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, en forma negligente, atropelló a la peatón doña Blanca Delgado Reyes, su representada, quien cruzaba la calzada de calle Sotomayor por el paso de peatones debidamente demarcado en el lugar y existiendo señalética de “ceda el paso”.

Señala que el accidente se produjo única y exclusivamente, por conducir el conductor demandado ya referido, con absoluto desprecio a la normativa contenida en la ley número 18.290, en especial, en cuanto no respetó derecho preferente de paso peatonal en zona de ceda el paso debidamente señalizada, como sostuvieron en el lugar de los hechos, a lo menos tres testigos presenciales, esto es, doña Blanca Vergara López, doña Carmen Madinagoitia Chamorro y doña Luisa Allen Veloso, a quienes presentará.

Dice que, a todos los antecedentes conocidos y según probarán, el atropello sufrido por su representada ocurrió por el hacer negligente, descuidado y con imprudencia temeraria de parte del conductor del vehículo tipo camioneta de aproximadamente 3.360 kilos de peso y que las lesiones físicas y psicológicas sufridas por su representada, son consecuencia directa y necesarias, de ese evento y que en efecto inmediatamente de ocurrido el accidente su representada fue derivada de urgencia en ambulancia al Hospital de Coronel donde se le diagnosticó herida contusa cuero cabelludo y policontusa de carácter leve tal como se comprueba en parte policial número 00604 de fecha 19 de junio de 2013 de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile de Coronel, documento que además da cuenta del resultado de alcoholemia a que fueron sometidos tanto la víctima como el chofer del vehículo arrojando resultados negativos.



Indica que, al llegar a su domicilio su representada, sus hijas tomaron la decisión de conducirla al Hospital Clínico del Sur para un mejor y acabado diagnóstico de sus lesiones, ingresando al servicio de urgencia el mismo día 19 de junio de 2013 siendo las 16.45 horas, oportunidad en que se le diagnosticó inicialmente traumatismo de la cabeza no especificado, y luego de varios exámenes se ordenó su hospitalización, esta vez con un diagnóstico menos alentador, así lo demuestra la certificación de fecha 20 de junio de 2013 del neurocirujano que la asistió doctor Roberto Vigueras Aguilera, quien refiere que la paciente doña Blanca Georgina Delgado Reyes, es portadora de TEC cerrado con contusión cerebral grave más hemorragia subaracnoidea traumática parietal derecha, además de presentar policontusiones y una herida contusa cuero cabelludo, siendo sus lesiones de carácter grave, con pronóstico reservado, que sanarán en 90 días con igual tiempo de incapacidad, lo que la mantuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico del Sur de la ciudad de Concepción, 6 días en total, hasta el 24 de junio de 2013, fecha en que se autorizó su alta médica.

Sostiene que, producto del accidente de su representada, se inició causa en el Juzgado de Policía Local de Coronel, rol 6779-2013, en que por resolución de fecha 31 de julio de 2013 el Juez Titular de dicho Tribunal, don Alex Moya Soto, se declaró incompetente atendida la gravedad de las lesiones que sufrió su representada y se remitieron los antecedentes al Juzgado de Garantía de Coronel, Tribunal que bajo el Rit 2014-2013 con fecha 2 de agosto de 2013, a su vez los remitió al Ministerio Público para su investigación, resultando formalizado el conductor del vehículo don Carlos Arsenio Sáez Valdés para finalmente arribar a un acuerdo reparatorio en la suma de \$300.000, sólo en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal del conductor. Agrega, que en exposición de las circunstancias de hecho, da por reproducido en toda su extensión, el contenido del informe consistente en fijación fotográfica del sitio del suceso y móviles intervinientes, que acompañó, suscrito con fecha 6 de enero de 2014, por el perito don Víctor M. Pavez Rozas, Suboficial de Carabineros, Oficial Investigador y con firmas administrativas de don Javier A. Sepúlveda San Martín, Capitán, Comisario Subrogante.

Expone que, las lesiones provocadas a su representada, todas de carácter grave, son causa necesaria del atropello y existe así, relación de causalidad, por ser aquellas su efecto inmediato y que son las siguientes: a) TEC Cerrado; b) Contusión cerebral grave con hemorragia subaracnoidea parietal derecha; c) Policontusión; d) Herida contusa cuero cabelludo; e) Molestias físicas que requieren tratamiento especializado, ejemplo: traumatólogo, otorrinolaringólogo, neurocirujano. Que, lo reseñado precedentemente es en base al examen médico legista que se realizó el día 02 de septiembre de 2013 y suscrito con igual fecha, correspondiendo al informe número 1081/13, por don Juan Zuchel Matamala (Dr.) Médico Legista, y, como consecuencia de las lesiones graves sufridas, que de mediar dolo estaríamos frente a un delito, pero que como cuasidelito habilita también para exigir la indemnización de todos los daños y perjuicios, según lo estatuye el artículo 2314 del Código Civil, disposición que se aviene en términos felices con lo dispuesto en los artículos 165 y en especial con lo prevenido en el artículo 169 de la Ley del Tránsito y que más aún, señala que no sólo



el chofer o conductor es responsable, sino que también lo es el dueño del vehículo que este conducía, en la especie, la demandada solidaria.

Relata que, en consecuencia, corresponde que el demandado principal, esto es, el conductor de la camioneta y el propietario del vehículo, sean condenados solidariamente al pago, de todos los daños causados y de los cuales ha sido víctima su representada, a título de indemnización, a saber: los daños directos que importan el tratamiento médico, consultas médicas, operaciones quirúrgicas, tratamiento, hospitalización, convalecencia y todos los que, se prueben en su oportunidad y que, a la data, estiman a una suma no menor de un millón setecientos tres mil trescientos cuatro pesos (\$1.703.304.-); y el daño moral, por este concepto, demanda la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000.-), porque si bien están conscientes que el perjuicio alcanza al sufrimiento espiritual y del alma, siendo imposible borrarlo y, que resulta imposible fijar un valor o justa medida equivalente, es la tendencia actual de la jurisprudencia, indemnizar todo daño.

Sostienen, que resulta difícil cuantificar, el sufrimiento de su representada, quien tal como indicó al inicio de este libelo se trata de una persona de la tercera edad, de 71 años a la fecha de ocurrencia del accidente y que en la actualidad tiene 75 años de edad y que en cuanto a los daños de carácter físico su representada quedó con problemas y dificultades al caminar, con dolores de caderas, pérdida parcial de su memoria y audición, cefaleas crónicas y recurrentes, con una cicatriz en el ojo de tipo interno que le obstaculiza su visión y tendinitis en su brazo derecho. Añade que, no pueden desconocer que por sus años todas y cada una de sus lesiones importan un mayor sufrimiento moral, al tener conciencia de la enorme dificultad para superar el traumatismo físico, sus lesiones no se recuperan con la misma facilidad y rapidez que una persona de menor edad, que a veces carece de recursos para acceder a un especialista y que debe depender de lo que sus hijas puedan aportarle en la medida de lo posible ya que han debido endeudarse para que su madre pudiera tener acceso a una mejor atención médica y además, porque fuerza es, representarse la pérdida de toda buena calidad de vida y saber a ciencia cierta que, las lesiones y sus secuelas disminuyen a esa edad en forma drástica las expectativas de vida avanzada e incluso, el llamado promedio estadístico y preciso es mencionar aquí, lo que ha debido esperar y recurrir a todas las instancias judiciales con el único objetivo de que de alguna manera se puedan paliar sus padecimientos y tenga una mejor calidad de vida a sus años, de envejecer con dignidad y tranquilidad y no estar atribulando a sus hijas con deudas para que ella no sufra lo que no le ha correspondido por el desgaste de los años sino por la imprudencia y poco respeto demostrado por el conductor del vehículo causante de los hechos dañosos que se reclaman. Que, todo se resume en las cavilaciones desesperadas y el aumento del dolor físico y emocional, que ha perdido en este tiempo expectativas de vida, ganando sólo estrés, temor y sensación de pérdidas irreparables, en el ocaso de su vida en que solo quiere disfrutar lo que le reste de ella en compañía de su seres queridos y nadie se imagina a esa edad tener que acudir a tribunales por una causa así, salvo que sea de declaración de interdicción por demencia, cuyo no es el caso.



En mérito de lo expuesto y normas legales que cita, solicita, tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios, en contra de don CARLOS ARSENIO SAEZ VALDES y HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ, más arriba individualizados y en las calidades mencionadas antes en el exordio, admitirla a tramitación y en definitiva acogerla en todas sus partes, condenándolos solidariamente al pago de los perjuicios por la suma total de cincuenta y un millones setecientos tres mil trescientos cuatro pesos (\$51.703.304.-), a la demandante y por los conceptos señalados o a la suma mayor o menor que el Tribunal determine conforme al mérito del proceso; más las sumas que se devenguen durante la tramitación de autos, con reajustes e intereses al día de pago efectivo, con expresa condena en costas.

A folio 13 y 14, de la carpeta judicial virtual, con fecha 09 de junio de 2017, se notifica por cédula a los demandados don Carlos Arsenio Sáez Valdés y don Héctor Carlos Inostroza Martínez.

A folio 18, de la carpeta judicial virtual, con fecha 27 de junio de 2017, comparece contestando la demanda, el apoderado de los demandados, don VICTOR RODRIGO MUÑOZ TORRES.

A folio 21, de la carpeta judicial virtual, con fecha 5 de julio de 2017, la apoderada de la demandante evacúa el trámite de la réplica.

A folio 23, de la carpeta judicial virtual, con fecha 13 de julio de 2017, el apoderado de los demandados, evacúa el trámite de la dúplica.

A folio 39, de la carpeta judicial virtual, con fecha 17 de enero de 2018, se realizó audiencia de conciliación, la cual no se produce por inasistencia de los demandados.

A folio 42, de la carpeta judicial virtual, con fecha 19 de enero de 2018, se recibe la causa a prueba.

A folio 91, de la carpeta judicial virtual, con fecha 16 de agosto de 2018, se cita a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que a folio 62, con fecha 13 de julio de 2018, la demandante dedujo tachas en contra del testigo de los demandados, don Carlos Alberto Leal Morales, invocando los N° 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto y mantener una íntima amistad con la persona que lo presenta.

SEGUNDO: Que, la parte demandada, evacuando el traslado conferido, solicita el rechazo con costas, de la tacha incoada por cuanto de los dichos del testigo no se desprende que carece de imparcialidad necesaria para declarar, descartándose que tenga interés directo o indirecto, porque tal interés debe tener un contenido patrimonial; y respecto de la otra tacha, dice que el testigo señaló que no era amigo de la parte que lo presenta, y la ley indica que la amistad debe ser íntima, manifestada por hechos graves, por lo que el tribunal calificará según las circunstancias.

TERCERO: Que el artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil prescribe: “Son también inhábiles para declarar: 6° Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad



necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.

Dela norma citada, es posible desprender la existencia de dos elementos que configuran la causal en estudio: 1.- Un interés directo o indirecto en el resultado del juicio. 2.- Falta de imparcialidad de la persona que se presenta a declarar. Estos elementos son copulativos, toda vez que se encuentran interconectados el uno con el otro.

Analizada la declaración prestada por el testigo es posible desprender que éste no trabaja para los demandados. Además, el interés en el resultado del juicio debe ser de carácter pecuniario, lo cual no fue acreditado por el incidentista y no se desprende de la declaración del testigo.

Así las cosas, sólo cabe rechazar la tacha en estudio como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

CUARTO: Que en cuanto a la tacha sustentada en el N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, cabe recordar que dicha disposición señala que: *“Son también inhábiles para declarar: 7° Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias”.*

Para que se configure esta causal de inhabilidad es necesario que existan dos elementos copulativos: A.-Que el testigo tenga íntima amistad con la persona que lo presenta a declarar o enemistad respecto de la persona contra quien declare. B.- Que la amistad o enemistad sean manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.

Resulta de trascendental importancia especificar de manera clara y detallada de qué formase configura la íntima amistad del testigo que se presenta a declarar a favor de quien lo presenta o la enemistad en contra de quien declara en el juicio. No es suficiente con realizar una mera enunciación de la causal en estudio, sino que además se requiere que se especifique, clara y distintamente, de qué manera ella se manifiesta.

En el caso de marras, la tacha deducida no ha sido especificada clara distintamente, sino que el incidentista se limitó a señalar que es amigo del peoneta, Mario, que andaba ese día, que han sido colegas, sin aportar mayores antecedentes, lo cual impide a este sentenciador calificar los hechos graves que hacen procedente esta causal.

De esta manera, solo cabe rechazar la tacha incoada como se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

EN CUANTO AL FONDO:

QUINTO: Que acorde a lo consignado en lo expositivo precedente, doña Claudia Andrea Rojas Cabrera, abogado, actuando en representación de doña Blanca Georgina Delgado Reyes, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Carlos Arsenio Sáez Valdés, en su calidad de causante directo y en contra de don Héctor Carlos Inostroza Martínez, como tercero civil responsable solidario, demanda que se reseñó en la parte expositiva de esta sentencia, a la cual nos remitimos.



SEXTO: Que, a folio 18, el apoderado de los demandados, don Víctor Rodrigo Muñoz Torres, contestando la demanda, solicita que la acción sea totalmente desechada con costas, y para el caso de acogerse se reduzca sustancialmente la indemnización de un modo prudencial por haberse expuesto la actora imprudentemente al daño, y en subsidio de las alegaciones precedentes y para el evento improbable que la acción de autos prospere, solicita al tribunal que la cuantía de las indemnizaciones pretendidas por el actor sea reducida sustancialmente de un modo prudencial, por sumas muy inferiores a las pedidas, conforme el mérito de autos y pruebas que se rindan, toda vez que las pretensiones monetarias del actor son absolutamente una exageración por lo desmedidas y desproporcionadas que no guardan coherencia alguna con la mínima envergadura de los hipotéticos daños materiales y morales sufridos, liberándose a su parte del pago de costas por haber litigado con motivo plausible.

Funda su contestación en que su parte niega y controvierte totalmente los hechos invocados por la parte demandante, de modo que siendo el peso de la prueba de cargo del actor, le corresponde acreditar los fundamentos facticos de sus alegaciones y la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad extracontractual que invoca, así como la existencia de un hecho ilícito o delictivo atribuible al demandado señor Coloma.

Dice, que el día 19 de junio de 2013 hubo un accidente de tránsito en la comuna de Coronel en el cual intervino la actora señora Delgado Reyes y el conductor señor Sáez Valdés en calle Remigio Castro al llegar a la intersección con calle Sotomayor, no es menos cierto que tal accidente ocurrió por exclusiva culpa y responsabilidad de la peatona señora Delgado Reyes y la concurrencia de culpa exclusiva de la supuesta víctima excluye la responsabilidad civil extracontractual de ambos demandados. Que, es falso que el señor Sáez Valdés haya atropellado a la peatona referida, porque ello supondría que la parte delantera del vehículo por el conducido haya embestido a la peatona referida, lo que jamás ocurrió. Agrega, que el día de los hechos el señor Sáez Valdés conducía una camioneta por calle Remigio Castro de esta comuna para virar a mano izquierda a calle Sotomayor y al detenerse en la intersección de ambas calles, la peatona referida, persona de avanzada edad y con serios problemas de audición, se afirmó o se sostuvo en la parte trasera de la camioneta en el sector pick up, y al retomar la camioneta la marcha, la peatona, hoy actora, pierde el equilibrio y cae al suelo, de tal manera, la peatona no fue atropellada por la camioneta sino que fue la propia peatona quien efectúa una conducta y una maniobra riesgosa, arriesgada, descuidada, imprudente y negligente y totalmente antirreglamentaria. Señala que, seguramente la actora el día de los hechos no estaba en las condiciones de salud para transitar por si sola por la vía pública sin la ayuda o asistencia de otras personas y que, no es posible atribuir alguna infracción a la Ley de tránsito al conductor señor Sáez Valdés, muy por el contrario, él se encontraba perfectamente atento a las condiciones de tránsito del momento y tanto es así que al ver a la actora en el suelo descendió del móvil y le prestó ayuda.

Manifiesta, que el parte policial respectivo nada refiere respecto de los supuestos testigos presenciales señalados en la demanda, por lo cual muy probablemente tales personas jamás



estuvieron presentes el día de los hechos, ya que el parte policial no señala testigo alguno. Que, en todo caso, estos hechos si bien fueron investigados por la fiscalía Local de Coronel en causa RUC 1310023439-9, RIT 2014-2013 del Juzgado de Garantía de Coronel, tal investigación penal termino en virtud de un sobreseimiento definitivo lo que equivale a una sentencia absolutoria con autoridad de cosa juzgada, por haberse celebrado un acuerdo reparatorio que fue cumplido a cabalidad, extinguiéndose la responsabilidad penal del conductor señor Sáez Valdés, por lo cual jamás se dictó sentencia condenatoria firme en sede penal.

Indica que, todos los antecedentes investigativos, partes o informes policiales, declaraciones extrajudiciales sea de testigos, sea de peritos, sea de imputados que puedan constar en la carpeta investigativa del Ministerio Publico carecen de valor probatorio en sede civil, toda vez que no se tratan de medios de prueba en materia procesal civil sino solo de meros registros de actos investigativos ajenos a toda formalidad e incluso los informes de lesiones evacuados por el Servicio Médico Legal en causas penales carecen de valor probatorio.

Dice, que la responsabilidad del propietario emana y es un corolario de la responsabilidad del conductor, de modo que si el conductor no ha cometido infracción alguna a la ley de tránsito y si el conductor no ha sido condenado por sentencia firme en sede penal, no se genera la responsabilidad del propietario, por ende, el artículo 169 de la ley de tránsito no se aplica en la especie, lo que debe determinar el rechazo de la demanda.

Precisa, que conforme el acuerdo reparatorio debidamente cumplido, celebrado en la causa RIT 2014-2013 del Juzgado de Garantía de Coronel, atendido la naturaleza jurídica transaccional o conciliatoria de tal acuerdo reparatorio, no solo se ha extinguido la responsabilidad penal del imputado de tal proceso, sino que a juicio de su parte, se ha extinguido la responsabilidad civil de ambos demandados solidarios.

Agrega, que el acuerdo reparatorio es fruto de un acuerdo de voluntades libre y espontaneo entre la víctima y el imputado con el objeto de reparar consecuencias civiles del hecho punible y una vez aprobados se puede exigir su cumplimiento ante el mismo juez de garantía de acuerdo a las normas del cumplimiento incidental y tal acuerdo reparatorio no puede ser dejado sin efecto por ninguna acción civil.

Dice, que en el evento de rechazarse la alegación de transacción o de conciliación invocada precedentemente alegan que en lo concerniente a los supuestos daños materiales y morales hechos valer en la demanda, su parte los niega expresamente no solo en lo referente a su existencia, sino también en cuanto a su naturaleza, envergadura y monto, que a su parte no le consta lesión ni enfermedad ni secuelas o problemas de caminar o auditivos o dolores o pérdida de memoria o cicatrices o problemas en el brazo respecto de la actora o que tales padecimientos sean consecuencia del accidente de tránsito referido en la demanda. Que, los problemas de salud o supuestas lesiones de la actora tienen causas anteriores o que ninguna relación tienen con el accidente de autos y por ende, su parte niega la relación de causalidad entre el supuesto hecho ilícito con las supuestas lesiones alegadas por la actora. Además, niegan que la actora haya visto



afectada su calidad de vida a consecuencia de los hechos invocados en el libelo pretensor y por ende niegan el daño material o moral alegado.

SEPTIMO: A folio 21, de la carpeta judicial virtual, con fecha 5 de julio de 2017, la apoderada de la demandante evacua la réplica, ratificando la demanda en todas sus partes, y agrega que al contestar la demanda el letrado Víctor Muñoz Torres en la primera hoja de su escrito de contestación se refiere “al demandado señor Coloma”, en la línea 14, hace presente que dicho señor no es parte de este juicio así como ninguna de los litigantes de autos se apellida de esa forma. Que, en cuanto a que el accidente se debió a la exclusiva culpa y responsabilidad de la peatona señora Delgado Reyes, entre otros factores debido a que ella se encontraba el día del siniestro con serios problemas de audición, ello no es efectivo, porque pese a reconocer que la demandante es una persona de la tercera edad ella era una persona autovalente al momento de sufrir el accidente, materia de este juicio, y es precisamente con ocasión de dicho accidente que ella quedó con secuelas físicas entre otros con problemas de audición, los que en todo caso no entendemos como en forma a priori, sin conocer personalmente a la demandante y sin contar con la expertise y conocimientos técnicos propios de la ciencia de la medicina, el abogado de la contraria puede hacer un diagnóstico de tal magnitud.

Que, alegan los demandados que la peatona y actora doña Blanca Delgado efectuó una maniobra riesgosa, arriesgada, descuidada, imprudente y negligente y totalmente antirreglamentaria, ello tampoco es efectivo, basta mirar la carpeta investigativa en que se realizaron pericias específicas las que arrojaron de un modo irrefutable que el accidente causado a la actora se debió a la imprudencia y a la falta de respeto de la señalética de tránsito por parte del demandado.

Que, como conclusión y al hecho de que no obstante haberse extinguido la responsabilidad penal del imputado, queda a salvo el hecho de ocurrir en sede civil demandando la indemnización que corresponda derivada del mismo ilícito, por la que la tesis sostenida por la contraria yerra en dicho punto.

OCTAVO: A folio 23, de la carpeta judicial virtual, con fecha 13 de julio de 2017, el apoderado de los demandados, evacuando el trámite de la dúplica, ratifica y da por reproducidas para todo efecto legal, las alegaciones y defensas invocadas por su parte al momento de contestar la demanda e insiste en que en la especie no se configuran los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual y que en sede civil ante la ausencia de una sentencia penal firme condenatoria.

NOVENO: Que, la demandante, a fin de acreditar sus alegaciones, en folio 1 de la carpeta judicial virtual, con fecha 30 de mayo de 2017, acompañó con citación y sin objeción de contrario la siguiente prueba documental: Copia del parte policial n°00604 de fecha 19 de junio de 2013 de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile de Coronel que da cuenta de la ocurrencia de los hechos, materia de esta demanda; Copia de resolución del Juzgado de Policía Local de Coronel en causa rol 6779-2013 que declara su incompetencia por el tipo de lesiones graves sufridas por su representada; Copia de resolución del Juzgado de Garantía de Coronel en causa Rit 2014- 2013 en que remite los antecedentes a la Fiscalía Local para su investigación; Copia de certificación de fecha



20 de junio de 2013 del neurocirujano doctor Roberto Viguera Aguilera del Hospital Clínico del Sur de la ciudad de Concepción, referida al diagnóstico definitivo sufrido por mi representada; Copia de informe consistente en fijación fotográfica del sitio del suceso y móviles intervinientes elaborado por la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile de Coronel, de fecha 6 de enero de 2014; Copia de informe del Servicio Médico Legal de Concepción suscrito por el doctor legista don Juan Zuchel Matamala n°1081/2013; Hoja de vida del conductor don Carlos Arsenio Sáez Valdés, chofer del vehículo causante del accidente; Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados de la camioneta, causante del atropello; y Copia de acta de procedimiento simplificado con salida alternativa de acuerdo reparatorio imputado don Carlos Arsenio Sáez Valdés.

A folio 64, con fecha 14 de julio de 2018, acompañó: Copia de boleta atención de urgencia n°0043173 del Hospital Clínico del Sur de Concepción; Copia de boleta de honorarios de fecha 22 de julio de 2013 del médico neurocirujano don Roberto Viguera Aguilera y Compañía Limitada; Detalle de cuenta por número, orden de fecha de ingreso 19 de junio de 2013 a fecha de alta 24 de junio de 2013; Copia de boleta atención de urgencia n°0042394 del Hospital Clínico del Sur de Concepción; Detalle de cuenta paciente urgencia n° 3092 del Hospital Clínico del Sur; Detalle de cuenta paciente urgencia n°21197 del Hospital Clínico del Sur; Bono de atención de urgencia n° de folio 255218095 de la actora doña Blanca Delgado Reyes; Bono de atención ambulatoria de fecha 28 de junio de 2013 n°59782911 en Hospital Clínico del Sur de Concepción; Orden de examen de tac de cerebro a doña Blanca Delgado de fecha 24 de junio de 2013 del Hospital Clínico del Sur; Copia de boleta atención de urgencia n°0043172 del Hospital Clínico del Sur de Concepción; Detalle de cuenta paciente urgencia n°244 del Hospital Clínico del Sur; Programa de atención de salud de FONASA a nombre de doña Blanca Delgado Reyes n°22054115; Bono de atención de urgencia de folio 255218095 de la actora doña Blanca Delgado Reyes; Bono de atención de urgencia de folio 255218095 de la actora doña Blanca Delgado Reyes; Tres bonos de atención de salud de Fondo Nacional de Salud de la actora doña Blanca Delgado Reyes n°307300598, 307300599 y 307300600; Programa de atención de salud de FONASA a nombre de doña Blanca Delgado Reyes n°25292334; Dos bonos de atención de salud de Fondo Nacional de Salud de la actora doña Blanca Delgado Reyes n°307300663 y 307300664; Programa de atención de salud de FONASA a nombre de doña Blanca Delgado Reyes por la suma de \$297.230 desde el 19/06/2013 al 24/06/2013 sobre cerebro, columna dorsal, cada espacio adicional y pelvis; y Dos bonos de atención de salud de Fondo Nacional de Salud de la actora doña Blanca Delgado Reyes n°307300492 y 307301360.

A folio 65, con fecha 14 de julio de 2018, acompaña copia de algunas piezas de la Carpeta investigativa de la Fiscalía Local de Coronel RUC 1310023439-9.

DECIMO: Que, a su vez, la parte demandante solicitó los siguientes oficios, los cuales fueron recepcionados en la carpeta judicial virtual:

A folio 73, con fecha 23 de julio de 2018, la remisión de la carpeta investigativa al Ministerio Público de Coronel, RUC 1310023439-9, que dio lugar a la causa Rit 2017-2013 del Juzgado de Garantía de Coronel;



A folio 93, con fecha 23 de agosto de 2018, la remisión de la copia de la causa Rit 2014-2013 del Juzgado de Garantía de Coronel.

A folio 94, con fecha 23 de agosto de 2018, ficha clínica y/o datos de la atención de urgencia de la demandante doña Blanca Georgina Delgado Reyes del Hospital Clínico del Sur de Concepción.

A folio 97, con fecha 10 de octubre de 2018, ficha clínica y/o datos de la atención de urgencia de la demandante doña Blanca Georgina Delgado Reyes del Hospital de Coronel.

UNDECIMO: Que, a su vez, la parte demandante, se valió también de la prueba testimonial, la cual consta a folio 62, de fecha 13 de julio de 2018, compareciendo doña Carmen Alicia Graciela Madinagoitia Chamorro, don Claudio Alberto Catalán Santibáñez, y don Gastón Alejandro Salvo Vega.

La primera testigo, expone que *ese día iba caminando entre las 10 u 11 de la mañana por Remigio Castro hacia Sotomayor y de frente mío en el paso de cebra, frente a la corporación asistencial, viene cruzando el paso de cebra la Sra. Blanca. Doblando de Remigio Castro hacia Sotomayor, un camión blanco tres cuartos hacia Sotomayor y atropella a la Sra. Blanca, yo estaba ahí mismo, fui la testigo más cercana que tuvo, incluso la ayudé con unos rasguños que tuvo e incluso la limpie de la cara porque quedó horrible... y fui yo quien llamó al hospital.*

Contrainterrogada, señala que *“en cuanto al equilibrio ella iba cruzando de lo más normal, iba derechita, caminó normalmente, lo perjudicial fue después del accidente en sus terapias, no volvió nunca más a ser una persona normal; ...recuerdo que fui a fiscalía, no recuerdo la fecha. Yo creo que declaré lo mismo que estoy declarando aquí; Ella no se cayó, fue atropellada primero que todo, y me quedé desde que fue atropellada hasta que llegó la ambulancia...nunca abrió sus ojos, como no soy médico no sé si habrá estado consciente o inconsciente, no reaccionó, y de ahí recuerdo que la llevaron al hospital de Coronel.*

En cuanto a los perjuicios, señala que *psicológicos, por lo que supe ella no sale a la calle ahora, tiene mucho miedo, psicológicamente debe estar muy mal; ... se siente con miedo, con temor, y las pocas veces que se le ha visto acompañada está deteriorada en la salud, decaída, cabizbaja, no es la misma señora Blanca de antes del accidente...”.*

El segundo testigo, expuso que *“puedo relatar al respecto las consecuencias físicas y psicológicas que sufrió doña Blanca Delgado...tuvo secuelas físicas consistentes en un TEC cerrado, tuvo problemas a la cadera, disminuyo la visión de un ojo, y jaquecas y cefaleas crónicas, lo que la llevó a un estado de depresión sin referirme al aspecto técnico de la depresión, sino que estaba muy acongojada, pues hasta ese momento ella era una persona muy independiente, hacia sus cosas tranquilamente, paseaba, y luego de eso debía ser asistida sin poder valerse por sí misma. Ella se atendía en un centro médico particular y costaba de su bolsillo y con la ayuda de sus familiares sus atenciones médicas...; tomé conocimiento a raíz de los propios dichos de la nieta de la demandante y de la misma demandante a quien en algunas oportunidades, mi ex polola tuvo que acompañarla en Concepción a efectuar trámites, en algunas oportunidades yo mismo las llevaba en auto al centro de Concepción...”.*



El tercer testigo, expuso que *“...si sé que la demandante doña Blanca sufrió daños físicos. Tomando conocimiento de ellos por medio de mi amiga Carmen paz, que es su nieta... sé que sufrió problemas en su cadera al momento de verla en una ocasión tenía una laceración en la cabeza, sé que además tiene problemas de tendinitis en su brazo derecho derivado del accidente, quedó con un problema de audición, y problemas de visión en uno de sus ojos, además de tener hasta el día de hoy problemas para caminar ya que quedó con una lesión en su cadera producto del impacto del vehículo que la atropelló. Daño psicológico, ya que por la edad que tiene doña Blanca, le fue y le ha sido difícil volver al estado al que se encontraba antes del atropello, si bien es una persona mayor ella siempre había estado sana, sin ninguno de los problemas que antes mencioné; Sé que hasta el día de hoy asiste al Hospital Clínico del Sur, por el tema de su cadera y pierna, pero desconozco la especialidad;*

DECIMO SEGUNDO: Que, a folio 86, con fecha 9 de agosto de 2018, se rindió prueba confesional solicitada por la demandante, a la cual comparecieron los demandados don Carlos Arsenio Sáez Valdés y don Héctor Carlos Inostroza Martínez, quienes declararon ante el pliego de posiciones.

El primero expone que él si iba el día 19 de junio del año 2013, alrededor de las 10.15 horas, conduciendo la camioneta marca Kia motor, placa patente TN-8186, por las calles de Coronel, y que el vehículo al momento del accidente era de propiedad de don Héctor Carlos Inostroza Martínez; y que en el momento donde ella cruzó, ella no se vio, porque apareció de repente.

El segundo expone, que el vehículo al momento del accidente era de su propiedad; que la actora estaba en la vereda y ella chocó la camioneta.

DECIMO TERCERO: Que, la parte demandada, se valió de prueba testimonial, que rola a folio 62, de fecha 13 de julio de 2018, compareciendo don Carlos Alberto Leal Morales, quien expuso: *“que él venía en la camioneta, don Carlos Sáez conduciendo..., quién se vino por Sotomayor y en la esquina había un ceda el paso en el cual no había nadie, ni cruzando nadie, porque yo venía con el vidrio de la ventana abajo mirando. Que, él ingresa, pasa el ceda el paso y él no atropella a nadie, lo que si había una señora en la parte donde termina la camioneta que estaba caída, pero la camioneta en ningún momento impactó a la señora, si le hubiera pegado un tortazo la mata. Que la señora estaba en la parte trasera de la camioneta.... Que, tiene que haber perdido el equilibrio y se afirmó en la camioneta porque la señora tiene como 70 años”.*

DECIMO CUARTO: Que, la parte demandada, a folio 75, con fecha 25 de julio de 2018, se valió de prueba confesional de doña Blanca Georgina Delgado Reyes, quien expuso ante la pregunta si presenta problemas de audición, que en este momento, si, después del accidente, esto es en el oído izquierdo, y no usa audífonos; que ella iba pasando por la línea cebrada y la camioneta la pasó a llevar, perdió el conocimiento, porque estaba en el suelo, pero no me caí, en la cabeza tengo una marca, los moretones, caderas y sufro de todos los dolores de hueso; ella sintió el golpe, cuando dobló, con la parte delantera.



DECIMO QUINTO: Que para que opere la responsabilidad extracontractual como la que se persigue en autos, el artículo 2314 del Código Civil y el 166 de la Ley de Tránsito, exigen como requisitos copulativos, la existencia del hecho ilícito que la origina, que la persona que lo cometió por acción u omisión sea responsable de su ocurrencia; que el hecho en cuestión haya ocasionado daño al demandante; y que exista una relación de causalidad entre el hecho y el daño referido.

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito; a su vez, el artículo 2329 del mismo texto legal prescribe que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

DECIMO SEXTO: Que respecto al primero de los requisitos de procedencia de la acción intentada, esto es, una acción u omisión dolosa o culposa de don Carlos Arsenio Sáez Valdés, la actora la hace consistir en que éste conducía una camioneta marca Kia Motors, placa patente TN-8186, de propiedad de don Héctor Carlos Inostroza Martínez, por calle Remigio Castro y al llegar a la intersección con calle Sotomayor, efectúa un viraje atropellando a la peatón doña Blanca, quien cruzaba por el paso de peatones y existiendo la señalética del ceda el paso.

Los antecedentes consignados en las motivaciones noveno a la décimo sexto, por la concordancia fáctica y fundamentos en ellos contenidos, han conducido a este sentenciador a la siguiente presunción judicial: que el día 19 de junio de 2013 don Carlos Arsenio Sáez Valdés, conducía el vehículo placa patente única TN-8186, y al efectuar un viraje atropella a la peatón doña Blanca Delgado Reyes, ya que no se percató de que la peatón iba cruzando por el paso de peatones debidamente señalizado y existiendo una señalética del “ceda el paso”.

Además, consta en el Parte de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coronel, N°00604, que el demandado de autos, “al realizar maniobra de viraje a la izquierda hacia calle Sotomayor al norte, cruza la calzada de oriente a poniente la peatón de sexo femenino doña Blanca Georgina Delgado Reyes, de 71 años, siendo atropellada...”

Asimismo, en dicho documento se deja constancia que en ese lugar EXISTE señalización, “Ceda el Paso” y además, que la visibilidad era buena, con luz natural.

Finamente el Parte N°00604, consigna como causa basal probable del accidente: “*Conductor no respeta derecho preferente de paso peatonal.*”

DECIMO SEPTIMO: Que además consta, en autos que el demandado, al arribar a un acuerdo reparatorio con la demandante de autos, reconoce los hechos que se le imputaban en la causa Rit 2017-2013, seguida ante el Juzgado de Garantía de Coronel, pagando una indemnización por concepto de pena de \$300.000.- pesos, con la cual se extingue su responsabilidad penal. Lo anterior se encuentra ratificado con el mérito del documento acompañado a folio 93, correspondientes al acta de audiencia de procedimiento simplificado.

De esta manera, surge con toda evidencia la existencia de un hecho generador de daño, el cual es conducir el vehículo placa patente única TN-8186, con infracción a lo dispuesto en los



números 2 y 10 del artículo 167 de la Ley de Tránsito 18.290, que señala “*En los accidentes del tránsito, constituyen presunción de responsabilidad del conductor, los siguientes casos: N°2 “No estar atento a las condiciones del tránsito del momento”; y N°10 “No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado”.*

DECIMO OCTAVO: Que analizado el tenor literal del acuerdo reparatorio indicado precedentemente, se desprende que las partes del presente juicio acordaron que la suma pagada por concepto de indemnización de perjuicios sólo extinguía la responsabilidad penal de don Carlos Arsenio Sáez Valdés, dejando a salvo cualquier otra acción indemnizatoria, por lo que al entablar la presente demanda, y estando demostrada, la responsabilidad del demandado, en el accidente de autos, el que causó daños a la demandante, no cabe sino concluir que se encuentra obligado a la indemnización, como prescribe el artículo 2314 del Código Civil, ya indicado.

Lo anterior, se encuentra igualmente ratificado mediante la declaración de la testigo presencial de los hechos doña Carmen Alicia Graciela Madinagoitia Chamorro, quien declaro que ella iba caminando por Remigio Castro hacia Sotomayor y de frente de ella, en el paso de cebra, venía cruzando el paso de cebra la señora Blanca, y doblando de Remigio Castro hacia Sotomayor, venía un camión blanco, el que la atropella.

DECIMO NOVENO: Que de esta manera, se encuentra plenamente acreditado el primero de los requisitos de procedencia de la acción en estudio, y por consiguiente se rechazará las alegaciones de inexistencia de responsabilidad del demandado, culpa de la demandante y de transacción o de conciliación invocada, como se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

VIGÉSIMO: Que, en este sentido, la controversia en la presente causa ha quedado circunscrita a determinar si como consecuencia de los hechos narrados en el libelo, se han producido respecto de la actora, los perjuicios patrimoniales que demanda, y el quantum de los mismos. De igual manera, la calidad y forma en que los demandados han de responder de los perjuicios causados.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto al daño directo reclamado, la actora lo hace consistir en los gastos en de tratamiento médico, consultas médicas, operaciones quirúrgicas, tratamiento, hospitalización, convalecencia, los que estiman en una suma no menor de \$1.703.304.- pesos. Para acreditar estos daños, la demandante acompañó los documentos detallados en el considerando noveno de esta sentencia.

Dichos documentos por tratarse de instrumentos privados que emanan de terceros que no han comparecido a la causa reconociéndolos, nada acreditan en principio por sí mismos. Sin embargo, estos antecedente, en conjunto con el acuerdo reparatorio suscrito entre las partes en el Juzgado de Garantía de Coronel, configura la base para construir una presunción con mérito probatorio suficiente, por su gravedad y precisión, para dar por establecida la existencia de los daños directos causados a la actora y que su cuantía ascendió a un total de \$1.703.304.- pesos.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de igual manera, la actora demanda indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, el cual hace consistir en que se trata de una persona de la tercera edad, de 71 años a la fecha del accidente y actualmente de 75 años, que quedó con daños de



carácter físicos, lo que importaría un mayor sufrimiento moral, al tener conciencia de la enorme dificultad para superar el traumatismo físico, ya que sus lesiones no se recuperan con la misma facilidad y rapidez de una persona menor de edad, además de la pérdida de una buena calidad de vida, estrés, temor, sensación de pérdidas irreparables, lo cual avalúa en la suma de \$50.000.000.- pesos.

Acreditó el daño moral que alega haber sufrido por medio de la prueba testimonial rendida en autos, donde los testigos doña Carmen Alicia Graciela Madinagoitia Chamorro, don Claudio Alberto Catalán Santibáñez, y don Gastón Alejandro Salvo Vega, declararon de manera concordante y coincidente que la actora, está deteriorada en la salud, no es la misma señora Blanca de antes del accidente, y que era independiente. La documental consistente en instrumentos privados cuya falsedad o falta de integridad no fue alegada, en especial certificado del Dr. Roberto Viguera dando cuenta de TEC cerrado con contusión cerebral grave más hemorragia subaracnoidea traumática parietal derecha, sumada a la restante prueba rendida, permiten presumir que a la demandante, producto del hecho culpable, sobrevino un sufrimiento psíquico producto del dolor físico, la angustia por el diagnóstico y tratamiento, así como las perspectivas vitales tras el evento traumático y las molestias que todo ello involucró.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, por otra senda, siempre sobre la base de los hechos acreditados señalados precedentemente, es inconcusa la edad de la víctima (71 años), por lo que es forzoso referirse al tratamiento que tienen las Personas Mayores según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconocidos como sujetos de protección especial, tácitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 párrafo 1, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador en su artículo 9; y expresamente en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como "Protocolo de San Salvador" (1988), en su artículo 17 (aun no ratificado por Chile), y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ratificada por Chile). Lo anterior, por que exigen del Estado en general, y de los tribunales de justicia en particular, una atención preferente.

Se debe mencionar de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que define en su artículo 2 a la Persona Mayor como aquella que tiene 60 años o más; su artículo 6 indica que "Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días". El artículo 7 establece que "Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente"; el artículo 8 "el derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad", por último, el artículo 35, reconoce entre otros, los siguientes principios generales "c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor", "g) La seguridad física, económica y social", "k) El buen trato y la atención preferencial" y "n) La protección judicial efectiva".



La Convención antes dicha fue promulgada por Decreto 162 de 01/09/2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicada en el Diario Oficial de 07/10/2017, por lo cual queda fuera de toda duda que es ley de la república, y dado su contenido, tiene fuerza en los términos inciso 2° del artículo 5° de la Constitución Política de la República.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, el encuadre normativo precedente, se hace para constatar que existen derechos específicos de que son depositarias las Personas Mayores, y en concreto la víctima y demandante, y particularmente relevantes para el caso son los derechos “a desarrollar una vida autónoma e independiente”. No cabe duda que reúne los caracteres de un Derecho Humano o un Derecho Fundamental (Nogueira, Teoría y Dogmática, página 145). Y en materia Civil, interesa establecer que estos derechos son aquellos que conocemos como Derechos de la Personalidad, que Ducci definió como aquellos “inherentes a la persona humana, aun no definidos, constituyen un atributo de la persona por ser tal, y en consecuencia son iguales para todos”, señalando el autor que “son los que comúnmente se llaman derechos extrapatrimoniales, pero ello no significa que no puedan llegar a tener una valorización económica, porque en caso contrario no podrían tener tutela jurídica” (Derecho Civil, Parte General, página 203), similar sentido adoptado por Alessandri, Somarriva y Vodanovic, agregando que se caracterizan por ser “derechos inherentes a la persona... por ser originarios, es decir, nacen con la persona; absolutos, esto es, pueden ejercerse contra todos, “erga omnes”, e inseparables del individuo; este no puede desprenderse de ellos”, aclarando los clásicos que “aunque algunos derechos de la personalidad no estén específicamente amparados por la ley positiva, si su violación importa un daño para la persona, esta puede demandar indemnización de perjuicios, porque, de acuerdo con nuestro Código Civil, por regla general todo daño que pueda imputarse a dolo o culpa de otra persona debe ser reparado por ésta”. (Derecho Civil Parte General, Tomo I, página 486).

Como se dijo, la demandante luego del accidente, perdió calidad de vida, perdió movilidad y ya no es la misma: eso está probado (considerando undécimo). Lo que se establece al sentar el marco de los derechos humanos de la Persona Mayor permite, sin necesidad de una rebuscada teorización, concluir que el hecho dañoso -también acreditado-, ha afectado sus derechos a la vida autónoma e independiente (Art. 7 CIADPM).

VIGÉSIMO QUINTO: Recurrir a la teoría crítica del pretium doloris, que entiende al daño moral como una especie daño dentro del género daño extrapatrimonial (Barrientos), tiene por fin determinar con la mayor exactitud posible los verdaderos efectos del acto dañoso. En este caso, se determinó según la teoría mayoritaria, la afectación de la integridad psíquica de la persona consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pero además, los hechos probados tienen el mérito de afectar otros derechos, como los ya expresados derechos a la vida autónoma e independiente de la Persona Mayor. No solamente hay dolor, hay derechos extrapatrimoniales afectados.

Un punto de especial importancia está consignado en el artículo 31 de la Convención, a propósito del “acceso a la justicia” que obliga a los Estados para asegurar que la persona mayor



tenga acceso efectivo a la justicia a la “adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas”, y la obligación de los Estados Parte por la cual “se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales”.

Así las cosas, se encuentra acreditado el daño moral sufrido por doña Blanca Delgado Reyes, el cual debe ser indemnizado en una cuantía que compense tanto el sufrimiento experimentado como la afectación a su derecho a desarrollar una vida independiente y autónoma, satisfaciendo con una alternativa pecuniaria derechos que no podrán ser devueltos a un nivel similar al anterior al accidente. En este orden de ideas, teniendo presente el tratamiento preferencial de las decisiones judiciales a favor de las Personas Mayores a que obliga el artículo 31 citado, y procurando una decisión justa, es que el quantum de la indemnización se ha razonado sobre variables como la esperanza de vida al nacer de las mujeres chilenas (Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud denominado “Informe Salud en las Américas +2017”), el promedio total de las pensiones pagadas en Chile (informe “número y monto promedio, en UF de las pensiones pagadas en el mes por modalidad, según tipo de pensión al 31 de diciembre de 2017”), y un estándar referencial de contenido ético de ingreso que conceda integralidad a la indemnización, como es el ingreso ético propuesto por la iglesia católica. De este modo, la diferencia entre el promedio total de las pensiones pagadas en Chile y el sueldo ético propuesto por la iglesia católica, multiplicado por los meses de vida probables que restan a la actora, alcanzan a una suma cercana a la que se dirá en lo resolutivo.

VIGESIMO SEXTO: Que en cuanto al último de los requisitos de procedencia de la acción intentada, esto es, la relación de causalidad entre los hechos imputables a los demandados referidos y el daño experimentado por la actora, cabe señalar que se encuentra plenamente acreditado, por cuanto de no ser por la acción imprudente del demandado don Carlos Sáez Valdés, no se hubiese ocasionado el atropello en el que se vio involucrada doña Blanca Delgado Reyes, que la ha tenido desde entonces con intensos dolores y debiendo someterse a diversos tratamientos médicos para recuperar su salud, lo cual sin lugar a dudas causó un profundo daño moral en ella.

VIGESIMO SEPTIMO: Que el artículo 169 de la Ley de Tránsito N° 8.290 establece la responsabilidad solidaria del conductor y el propietario de un vehículo respecto de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo. De tal manera, y habiéndose acompañado a folio 1 Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados, del Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual da cuenta que don Héctor Carlos Inostroza Martínez, era el propietario del vehículo involucrado en el accidente a la fecha de éste; y no existiendo en autos antecedente alguno que exima al propietario del vehículo indicado de tal responsabilidad, al no haber rendido prueba en tal sentido, no cabe sino acoger también la demanda a su respecto.



VIGESIMO OCTAVO: Que debiendo ser completa la indemnización, es procedente acoger la pretensión dela actora de obtener reajustes e intereses, ambos calculados desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta la fecha del pago efectivo.

VIGÉSIMO NOVENO: Que la demás prueba acompañada en nada altera las conclusiones a las cuales ha arribado este sentenciador.

Por estas consideraciones, Y VISTO, además, lo dispuesto por los artículos 165, 166, 167, 169 y siguientes de la Ley N° 18.290; 1698, 1699, 2314 y 2329 del Código Civil; 170, 341, 346 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas citadas en el cuerpo de la sentencia, **SE DECLARA:**

EN CUANTO A LAS TACHAS:

I.- Que, **SE RECHAZAN**, las tachas deducidas en contra del testigo don Carlos Alberto Leal Morales, por las causales de los números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

EN CUANTO AL FONDO:

II.- Que, **SE ACOGE**, la demanda interpuesta a folio 1 y siguientes, por doña Claudia Andrea Rojas Cabrera, en representación de doña BLANCA GEORGINA DELGADO REYES, en contra de don CARLOS ARSENIO SÁEZ VALDÉS y don HÉCTOR CARLOS INOSTROZA MARTÍNEZ, en cuanto se condena a los demandados, a pagar solidariamente a la actora a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente la suma de **\$1.703.304.- pesos** y por concepto de daño moral la suma de **\$30.000.000.- pesos**, con reajustes e intereses, calculados desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta la fecha del pago efectivo.

III.- Que se rechazan las alegaciones de inexistencia de responsabilidad de los demandados, la culpa de la demandante y de transacción o de conciliación invocada por los demandados.

IV.- Que, se condena en costas a los demandados por haber sido totalmente vencidos.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 445-2017

Dictada por **MANUEL RODRIGO ARGANDOÑA OSSES**, Juez Subrogante del primer Juzgado de Letras de Coronel.

CERTIFICO: Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Coronel, 29 de octubre de 2018.

